

Filipinas: arrestos, torturas y elecciones presidenciales

JAMES PETRAS, ROBIN EASTMAN-ABAYA :: 06/05/2010

La detención continuada y el abuso de 43 médicos rurales es un mensaje estilo gángster: ¿¡Manteneos al margen de las comunidades pobres o sufriréis un destino similar!?

La carrera para las elecciones presidenciales es una excusa para la mayor represión patrocinada por el Estado, pues la principal 'democracia escuadrón de la muerte' de Asia libra una guerra contra sus médicos rurales progresistas.

Existe una profunda contradicción entre las escandalosamente violentas y corruptas elecciones en Filipinas y aquéllas en Corea del Sur, Taiwán, Japón y Malasia, donde las élites dominantes se han asegurado la hegemonía a través de prosperidad económica, aumento de los salarios, incremento del empleo y amplios servicios sociales para sus ciudadanos. En estos países la élite puede arreglárselas debido a los resultados de unas elecciones relativamente "abiertas", mientras que en Filipinas cualquier reto ante la cerrada, y de base familiar, clase dominante es recibido con un terror despiadado.

En Filipinas el estancamiento del sector agrícola y un sector manufacturero en retroceso, combinado a una política electoral dominada por una coalición de terratenientes, señores de la guerra y clanes familiares oligárquicos, ha conducido a una pobreza masiva que profundiza en las desigualdades de clase y la polarización social. Las élites son reacias a tolerar cualquier oposición o movimiento por el cambio. Como no han sido capaces de establecer su legitimidad o hegemonía por medio de programas y políticas que creasen prosperidad para las masas filipinas, la élite política filipina confía en los militares y los paramilitares para reprimir los movimientos populares sociales, mientras sus aliados entre los señores de la guerra locales y los líderes de los clanes "despachan" los votos.

La elecciones en Filipinas son competiciones violentas entre familias "oligárquicas" rivales -un patrón detenido en el tiempo de las rivalidades en el siglo XIX- donde las pistolas y los asesinatos, así como las urnas, deciden qué "facción" gobernará. Las élites políticas contratan incluso la ayuda de la policía, el ejército, paramilitares y escuadrones de la muerte locales para matar a sus principales líderes rivales y así asegurar la "victoria" de sus candidatos. La reciente masacre de 57 civiles (incluyendo a 24 periodistas) de camino para registrar a un candidato local, cometida por un señor de la guerra aliado de la Presidenta, confirma que las próximas elecciones estarán entre las más sangrientas.

La principal oposición a las políticas de los oligarcas en Filipinas proviene de las organizaciones sociales independientes. Estos movimientos de base, comunales, están comprometidos en organizar programas de salud, existiendo también organizaciones de mujeres y por el medioambiente, grupos pro derechos humanos que defienden a trabajadores, campesinos y activistas sociales, junto con sindicatos de clase y organizaciones de pequeños granjeros y trabajadores del campo.

La "batalla por los votos" entre las élites es estrecha pero intensa: las gratificaciones de la administración y el acceso ilimitado a las arcas del Estado es lo que sostiene el capitalismo

de amigotes filipino, a pesar de la retórica del “libre mercado” y la “empresa privada”. El “proceso” electoral garantiza el número apropiado de votos para el candidato apropiado mediante una combinación de sobornos, amenazas, violencia y fraude total.

La carrera presidencial de 2004 en Filipinas fue la plantilla para elecciones en la “democracia escuadrón de la muerte”: la “victoria” de la Presidenta Gloria Macapagal Arroyo fue cimentada en una campaña de terror y asesinatos contra candidatos y organizadores políticos que pertenecían a los partidos sectoriales de la “lista de partidos” que representaban a grupos marginados como pobres urbanos, obreros, agricultores, mujeres y estudiantes, y garantizada por una inolvidable conversación, intervenida, de la Presidenta, ordenándole a su comisionado para las elecciones (el escándalo “Hello Garci”) entregar porcentajes específicos de votos.

Mientras compiten entre ellos, los candidatos de la élite trabajan juntos para oponerse a cualquier movimiento social popular que emerja dentro de sus dominios sociales y políticos; de aquí se deriva el aumento de represión sin precedentes según el proceso electoral se va desarrollando. Para estos políticos, a la vez que señores de la guerra, toda actividad organizada independiente dentro de sus “territorios” amenaza directamente su control clientelista sobre los votantes y debe ser detenida violentamente. Esta dinámica es la clave para entender los miles de ejemplos de violencia perpetrada contra periodistas independientes, trabajadores de la sanidad, trabajadores de asistencia jurídica, sindicalistas, profesores, clérigos rurales y muchos otros.

Arresto masivo de trabajadores del sector sanitario acusados de “Terrorismo”

El 6 de febrero, 300 soldados y policías militares fuertemente armados, enmascarados, irrumpieron en la residencia provincial de la Doctora Melecia Velmonte, distinguida especialista en enfermedades infecciosas y Profesora Emérita del Colegio de Medicina de la Universidad de Filipinas, y arrestaron a 43 trabajadores de la sanidad, médicos y enfermeros que habían estado celebrando un seminario sobre preparativos para un posible desastre rural tras las secuelas del devastador tifón Ketsana. Se les vendaron los ojos, se les ató y llevó a un campamento militar donde sufrieron violentos interrogatorios y torturas para ser acusados de terrorismo y pertenencia al movimiento guerrillero El Nuevo Ejército del Pueblo. La dueña de la granja donde los “terroristas” médicos se reunían, Dra. Velmonte, y su hijo, que estaban presentes durante los arrestos y que protestaron por la invasión de su propiedad sin una orden judicial, no fueron arrestados.

Los 43 detenidos médicos han estado custodiados en un campamento militar desde entonces sin acceso posible para familiares y abogados. Los falsos cargos de posesión de armas contra los trabajadores sanitarios se basan en explosivos, pistolas y manuales para la fabricación de bombas, obviamente colocados en sus pertenencias. Se acusa a una enfermera de tener una granada de mano bajo la almohada. Un desfile de cargos claramente falsos, incluyendo el de participación en “unidades comunistas de asesinato”, fueron levantados contra los médicos, (especialmente inverosímiles los levantados contra un especialista de la seguridad social de 61 años que sufre de diabetes e hipertensión) así como contra los enfermeros y los trabajadores de la sanidad. Estos absurdos cargos, la extraña “redada” estilo comando en la residencia de la Dra. Velmonte y el prolongado aislamiento y

abuso de los detenidos fueron defendidos por el Gobierno, al más alto nivel, encontrando pocas quejas o llamamientos para una investigación por parte de la oposición dirigida a su vez por la élite. El Decano del Colegio de Medicina de la Universidad de Filipinas publicó una dura denuncia del masivo arresto en la que describió el abuso de los militares sobre los trabajadores sanitarios como parte de un patrón de ataques contra miembros del sector sanitario que buscan completar su misión de servicio a la población rural desatendida.

Los detenidos son conocidos como “Morong 43” por el nombre del pueblo en la provincia de Rizal donde el arresto se llevó a cabo. Se han dado masivas protestas y han surgido grupos de apoyo entre una gran variedad de asociaciones de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos de clase en Filipinas, y grupos de enfermeros y organizaciones pro derechos humanos en Norte América y Europa. El incidente fue publicado en el Lancet, prestigiosa revista médica británica. La prensa estadounidense, que cubre por rutina abusos de los “derechos humanos” contra profesionales independientes en China y Birmania, tiene todavía que hacer mención del arresto y tortura de 43 trabajadores médicos en Filipinas, cuya presidenta, Macapagal Arroyo, es un firme aliado político del Gobierno Obama.

Las “Razones” detrás de la represión

El brutal asalto y arresto, por parte del régimen de Macapagal Arroyo, de 43 trabajadores de la sanidad, comprometidos con proveer servicios médicos accesibles y básicos y ayuda y entrenamiento contra los desastres a los pobres del medio rural, puede parecer irracional desde un punto de vista económico: después de todo, en un país donde más de un 70% de la población rural nace y muere sin ver nunca a un médico, estos trabajadores sanitarios ofrecen servicios sociales vitales a poblaciones marginadas sin coste alguno para el Gobierno.

Sin embargo las consideraciones económicas no son lo que atañe a las políticas de un régimen impopular profundamente inmerso en escándalos de corrupción y triquiñuelas electorales. La principal consideración del régimen de Macapagal Arroyo es política: cómo puede el régimen mantener el control sobre un electorado intranquilo, profundamente desencantado con los señores de la guerra, líderes de clan y matones paramilitares locales, que “redondean” sus votos para el candidato elegido por el régimen. En este contexto, las clínicas de salud locales, dirigidas por trabajadores sanitarios independientes bajo el control de la comunidad, son una amenaza a la cadena local de mando del régimen, que dirige la amplia “máquina de patronato” que dicta quién vota y cómo. Cualesquiera que sean los exiguos servicios sociales que existan en las áreas rurales tienen que estar totalmente bajo su control para así subrayar la dependencia que el electorado tiene de los representantes locales del régimen.

Centros de salud de base comunal, donde trabajadores sanitarios ofrecen y enseñan medicina preventiva, higiene básica, preparación contra desastres y muchos otros servicios, permiten pensar y actuar, independientemente de los jefes locales, a pequeños granjeros, trabajadores del campo y a sus familias. Trabajadores sanitarios voluntarios muestran un micro modelo de a lo que un programa exhaustivo de salud rural debería parecerse, en contraste con el inaccesible, corrupto y privatizado sistema de cuidados médicos promovido por el Gobierno de la Nación.

Bajo el régimen de Macapagal Arroyo, el saqueo de las arcas del Estado ha depauperado el sistema sanitario hasta el punto de que más de 3000 enfermeros y médicos se ven forzados a abandonar cada año el país. Las clínicas privadas y las compañías de seguros suministran servicios médicos de calidad a empleados asalariados de grandes negocios, opulentos profesionales de clase media y miembros de la clase alta. En los hospitales públicos, especialmente en los mayores hospitales docentes, como el enorme Hospital General Filipino, jóvenes doctores, que ofrecen servicios críticos a decenas de miles de pacientes pobres y de baja clase media, trabajan sin salario durante meses o incluso años. Personal y facultativos están tan pobremente pagados que se ven forzados a trabajar paralelamente en clínicas privadas para poder sobrevivir.

Con las próximas elecciones presidenciales de Mayo, la élite política ha hecho un cálculo lógico: como resultado de sus saqueos y brutalidad, las promesas de prosperidad no pueden “comprar” el apoyo del electorado, cuya “lealtad” debe ser entonces “garantizada” a través de la tradicional doble M de la gobernancia filipina: Matones y munición. [1]

Fuertemente financiado y alentado por los EE.UU. en su “Guerra Mundial contra el Terror”, el régimen de Macapagal Arroyo ha elaborado su propia lista de amenazas: primero, en el “orden de batalla”, se encuentran los movimientos sociales populares, cuyos dedicados activistas no se venden. Esto explica el uso extendido del arresto masivo y la detención continuada de los “Morong 43” por las fuerzas militares del régimen y los “asesinatos selectivos” de candidatos políticos populares e independientes y líderes comunales independientes.

El ejército ha hecho caso omiso de las órdenes de la Corte Suprema de Filipinas para trasladar a los 43 trabajadores sanitarios a Manila donde tendrían acceso a sus abogados y a cuidados médicos. La detención continuada y el abuso de los “Morong 43” por parte del régimen es un mensaje estilo gángster al movimiento de la sociedad civil filipina: “¡Manteneos al margen de las comunidades pobres o sufriréis un destino similar!” La táctica del gobierno de Macapagal Arroyo y sus partidarios en la Casa Blanca es proceder con la farsa electoral como si “nada fuera mal”.

Lo que se necesita urgentemente es una campaña internacional que exponga el envés oscuro de las elecciones filipinas y que garantice la libertad y el regreso de los “Morong 43”, sanos y salvos, a sus familias y comunidades. Lo que está en juego no son sólo las vidas de los trabajadores sanitarios presos sino también las vidas y el bienestar de muchos miles de granjeros pobres y sus familias que dependen de esos servicios vitales que les brindan.

¡Justicia para los trabajadores rurales de la sanidad!

NdelT: [1] Traditional double G's of Philippine governance: Guns and goons. en el original.

Artículo original: <http://petras.lahaine.org/articulo.php?p=1803> - Traducido del inglés para *Rebelión por Andrés Prado*.

<https://www.lahaine.org/mundo.php/filipinas-arrestos-torturas-y-las-elecci>